Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha seis (06) de marzo de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **04813/INFOEM/IP/RR/2023**, interpuesto por **XXX XXX**, en lo sucesivo el **RECURRENTE,** en contra de la respuesta del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México**, en adelante el **SUJETO OBLIGADO**,se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **A N T E C E D E N T E S**

1. El diez (10) de agosto de dos mil veintitrés, el particular presentóa través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) vinculada al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la solicitud de información pública registrada con el número **00050/CECyTEM/IP/2023,** mediante la que requirió lo siguiente:

*“Con el objetivo de verificar el cumplimiento y responsabilidad del personal administrativo y docente del CECyTEM Plantel Nicolás Romero III, solicito conocer el nombre completo de cada uno de los servidores públicos, administrativos y académicos, que laboran en dicho plantel, sus horarios laborales de cada uno, así como el record de asistencias y/o inasistencias del personal (administrativo y académico). La información solicitada solo se requiere a lo correspondiente al periodo comprendido de enero a julio del 2023.”* (Sic).

1. Se hace constar que el particular señaló como modalidad de entrega de la información: ***A través del SAIMEX***.
2. El diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés, el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Se envía la respuesta correspondiente a través del oficio No. 210C0401000052T/ADMIN186/2023 de fecha 14 de agosto de 2023, signado por el Director del CECyTEM plantel Nicolás Romero III.*

*ATENTAMENTE*

*L.A. MARÍA DANIELA AGUILAR TORRES”* (Sic.)

1. Se hace constar que el **SUJETO OBLIGADO** acompañó a su acuse de respuesta con el archivo electrónico cuyo título y contenido se describe a continuación:
   1. ***“OFICIO 186\_2023 ANEXO SOL 50.pdf”***: Documento de dos fojas consistente en los siguientes instrumentos:
      1. Copia digitalizada del oficio número 210C0401000052T/ADMIN186/2023, de catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés, emitido por el Director del Plantel Nicolás Romero III, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, por el que manifiesta adjuntar la relación de personal, sus horarios y récord de asistencias y/o inasistencias de enero a julio de dos mil veintitrés.
      2. Relación del personal adscrito al Plantel Nicolás Romero III, en el que se advierten los nombres de los servidores públicos, sus días y horarios laborales, así como el reporte de asistencias e inasistencias registradas durante los meses de enero a julio del dos mil veintitrés.
2. Derivado de la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés, el particular interpuso el recurso de revisión **04813/INFOEM/IP/RR/2023**; impugnación en la que refirió lo siguiente:

* **Acto impugnado:** “*hacen entrega de una información resumida ya que esos no son los formatos de los horarios que se les entregan a los profesores, no todos los docentes trabajan de lunes a viernes, por lo que no están entregando la información tal y como existe están haciendo un concentrado de la información. Se solicita se haga la entrega de los horarios tal y como se le entrega a cada uno de los docentes, junto a su récord de asistencia especificado por día.”* (Sic).
* **Razones o motivos de inconformidad:** Se hace constar que el ahora **RECURRENTE** no hizo uso de este apartado dentro de su escrito; empero, del *Acta Impugnado* se advierte la manifestación de agravios que permitan a este Organismo Garante a entrar al estudio de fondo del asunto.

1. No se omite mencionar que el ahora **RECURRENTE** adjuntó, a su recurso de revisión, un archivo electrónico que lleva por título ***“Archivo1692981893533null”***, el cual no puede ser reproducido su contenido en ninguno de los programas o motores de *software* propiedad de este Instituto.
2. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente **04813/INFOEM/IP/RR/2023**; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turnó a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala**, para su análisis.
3. La Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción II, de la Ley de la materia, a través del acuerdo de admisión de **veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía SAIMEX, a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a derecho convinieran, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara su Informe Justificado respectivo.
4. El **cinco (05) de septiembre de dos mil veintitrés**, el **SUJETO OBLIGADO** presentó, en vía de informe justificado, el archivo electrónico cuyo título y contenido se señala a continuación:
   1. ***“Recurso de Revisión solicitud 50\_2023.pdf”***: Documento de una foja consistente en un escrito libre, sin fecha de emisión, folio único de identificación, o carátulas institucionales, mediante el cual, el **SUJETO OBLIGADO** ratifica su respuesta inicialmente proporcionada a la solicitud de información **00050/CECyTEM/IP/2023**.
5. El **uno (01) de febrero de dos mil veinticuatro**, el archivo electrónico presentado por el **SUJETO OBLIGADO**, en vía de informe justificado, fue puesto a la vista del **RECURRENTE**, concediéndole un plazo de tres días hábiles a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera. Empero, de las constancias que obran dentro del expediente digital formado en el SAIMEX, se aprecia que el particular no hizo uso de su derecho de réplica sobre los nuevos contenidos.
6. El **uno (01) de febrero de dos mil veinticuatro**, se notificó en el SAIMEX la ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión, con base en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 181 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[1]](#footnote-2).
7. Este Organismo Garante no pasa por alto explicar, que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión |recibidos dentro del primer semestre del dos mil veintidós; que, en comparación con los recibidos el año pasado, y en el mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400% el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto. Circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
8. Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la Ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
9. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
10. En ese sentido, el Legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
11. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
    1. **Complejidad del Asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
    2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
    3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
    4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.
12. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
13. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”[[2]](#footnote-3)*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
14. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
15. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.*** *“A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos.”[[3]](#footnote-4)*

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.*** *“En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.”[[4]](#footnote-5)*

1. Por ello, este Organismo Garante, comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
2. Finalmente, el **ocho (08) de febrero de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente decretó el cierre del periodo de instrucción, por lo que ordenó turnar el expediente para su resolución, misma que ahora se pronuncia; y ------------------------

# **C O N S I D E R A N D O**

## 

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios**.**

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del SAIMEX**,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que si el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el **diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés**, el plazo para interponer el recurso de revisión trascurrió del **dieciocho (18) de agosto al siete (07) de septiembre de dos mil veintitrés**; sin contemplar en el cómputo los sábados, domingos y días inhábiles, en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. Luego entonces, si el hoy **RECURRENTE** presentó el recurso de revisión con número **04813/INFOEM/IP/RR/2023** el **veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés**, éste se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en la Ley de la materia.
3. Por otro lado, de la revisión al expediente electrónico contenido en el SAIMEX**,** se desprende que la parte solicitante, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública en los expedientes que se revisan, tanto en las solicitudes de información como en los recursos de revisión, **no señaló su nombre, ni se tiene certeza de su identidad**; sin embargo, es importante señalar que el nombre de los Solicitantes y Recurrentes no es un requisito indispensable para la tramitación del acto procesal específico en materia de acceso a la información, ello en estricto apego al numeral 155 párrafo tercero de la Ley de la materia, en concatenación con el 180 del mismo ordenamiento.
4. Esto es así, ya que de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracciones III y IV de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**; 5, párrafos vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, fracciones III, IV y V, de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México**, se establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos, además de que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece la Constitución Federal y Local.
5. Por lo cual, de una interpretación sistemática, armónica y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que inclusive, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al Solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.
6. Asimismo, como lo establece la Convención Americana en su artículo 13, el derecho de acceso a la información es un derecho humano universal y en consecuencia, toda persona tiene derecho a solicitar acceso a la información.
7. De igual forma, la Corte Interamericana ha precisado que no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado, excepto en los casos en que se aplique una legítima restricción permitida por la Convención Americana.
8. Luego entonces, el nombre del **SOLICITANTE** y subsecuente **RECURRENTE** no puede ser considerado un requisito indispensable de procedencia del recurso de revisión que nos ocupa, ya que el acceso a la información no está condicionado a acreditar algún interés, ya sea jurídico o legítimo, máxime que es un elemento subsanable por este Órgano Resolutor.
9. Consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180, último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

**TERCERO. Del planteamiento de la *Litis*.**

1. Se requirió conocer el nombre completo de cada uno de los servidores públicos, administrativos y académicos, adscritos al Plantel Nicolás Romero III, así como sus horarios laborales y récord de asistencias de enero a julio de dos mil veintitrés. El **SUJETO OBLIGADO** entregó una relación del personal adscrito al Plantel Nicolás Romero III, donde se aprecian sus días y horarios laborales, así como el reporte de asistencias e inasistencias de enero a julio de dos mil veintitrés.
2. El particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** mediante el recurso de revisión al rubro citado, y en el que señaló por agravios, que no se le entregaron los formatos de horarios que se les entregan a los profesores y, que no se le hizo entrega de la información tal y como existe en sus archivos.
3. En ese sentido, este Órgano Garante advierte que las razones o motivos de inconformidad manifestados por el **RECURRENTE** sugieren que la respuesta proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO** no cumplió con los principios contendidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señalan que en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea **confiable**.
4. Por lo anterior, la *Litis* a resolver en el presente recurso se circunscribe en determinar si la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** colma el derecho de acceso a la información ejercido por el **RECURRENTE** o, si por el contrario, se actualizan las causales de procedencia del recurso de revisión establecidas en el artículo 179 fracciones I y/o VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y que se transcriben a continuación:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***I.*** *La negativa a la información solicitada;*

*(...)*

***VIII.*** *La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;(...)”*

## **CUARTO. Estudio y Resolución del asunto.**

**I. De la atención a la solicitud de información.**

1. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 150, establece que el procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho en cuestión y se rige por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares, así como atención adecuada a las personas con discapacidad y a los hablantes de lengua indígena con el objeto de otorgar la protección más amplia del derecho de las personas.
2. Para atender las solicitudes de información, los Sujetos Obligados contarán con un área denominada **Unidad de Transparencia**[[5]](#footnote-6), la cual será presidida por un Titular, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad **será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información** y tendrá la alta responsabilidad de verificar, en cada caso, que la misma no sea confidencial o reservada. Asimismo, contará con las facultades internas necesarias para **gestionar la atención a las solicitudes de información** en los términos de la Ley General y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[6]](#footnote-7).
3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, las Unidades de Transparencia tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes:
   1. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;
   2. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
   3. Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada; y
   4. Efectuar las notificaciones a los solicitantes.
4. Otros sujetos del proceso de atención a las solicitudes de información son los servidores públicos habilitados, quienes serán designados por el titular del Sujeto Obligado a propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia[[7]](#footnote-8) y tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes[[8]](#footnote-9):
   1. Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia; y
   2. Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad de Transparencia.
5. De tal manera que cada una de las áreas administrativas del **SUJETO OBLIGADO** deberá contar con un servidor público habilitado, quien será, a su vez, el enlace entre la Unidad de Transparencia y el área administrativa, y se encargará de buscar, localizar y proporcionar la información que se requiera a través de las solicitudes de acceso a la información.
6. Establecido lo anterior, de la lectura a la solicitud de información **00050/CECyTEM/IP/2023**, y como fuera señalado en el *Planteamiento de la Litis* de esta resolución, se advierte que el entonces **SOLICITANTE** requirió acceder a la siguiente información relacionada con el personal adscrito al Plantel Nicolás Romero III, por el periodo comprendido de enero a julio de dos mil veintitrés:
   1. **Nombre completo;**
   2. **Horarios laborales; y**
   3. **Récord de asistencias y/o inasistencias.**
7. En respuesta a la solicitud de información **00050/CECyTEM/IP/2023**, el **SUJETO OBLIGADO** presentó el oficio número 210C0401000052T/ADMIN186/2023 de catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés, emitido por el Director del Plantel Nicolás Romero III, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual, manifestó lo siguiente:

*“(…) envío la relación de personal, sus horarios y el récord de asistencias y/o inasistencias del periodo que comprende de enero a julio de 2023.”* (Sic)

1. Adjunto al instrumento anterior, el **SUJETO OBLIGADO** presentó una relación del personal adscrito al Plantel Nicolás Romero III, constante de 27 registros, y de los cuales, se advierte su nombre completo, día y horario laboral, así como un reporte de asistencias e inasistencias reportadas durante los meses de enero a julio de dos mil veintitrés.
2. Por su parte, el ahora **RECURRENTE** promovió el recurso de revisión con número al rubro indicado, en contra de la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, y en los que señaló por agravios:
   1. Que no se le entregaron los formatos de horarios que se entregan a los profesores; y
   2. Que se le entregó la información resumida.
3. Luego, en vía de informe justificado, el **SUJETO OBLIGADO** presentó un escrito libre cuyo contenido esencial manifiesta lo siguiente:

*“(…)* ***el Colegio presenta la información como obra en sus archivos, dando atención oportunamente en los plazos establecidos****, sin embargo, se hace la atenta invitación de consultar la información de interés público en las oficinas de la Dirección General, ubicadas en Libramiento José María Morelos y Pavón No. 401 Sur, Col. Llano Grande C.P. 52148, Metepec, Estado de México en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, exceptuando los días inhábiles”* (Sic)

(Énfasis añadido)

1. Derivado de lo anterior, se procederá a analizar la naturaleza de la información solicitada, a fin de determinar si el **SUJETO OBLIGADO**, con su respuesta y posterior informe justificado, colmó el derecho de acceso a la información; o, si por el contrario, procede la entrega de lo solicitado.

**II. De los límites del derecho de acceso a la información.**

1. Previo a iniciar el análisis de la información solicitada, se considera esencial citar el Criterio de Interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” el diecinueve (19) de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

***INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3, 4,11 Y 41.*** *“De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

1. El derecho de acceso a la información encuentra su materia elemental en los documentos, y la Ley de Transparencia local nos brinda el siguiente concepto[[9]](#footnote-10), para darnos un mejor panorama:

***“XI. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o*** *bien,* ***cualquier*** *otro* ***registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los******sujetos obligados****, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;”*

(Énfasis añadido)

1. Correlativo a lo anterior, debemos tomar en cuenta los artículos 4 y 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales establecen lo siguiente:

***“Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.***

***Artículo 12. Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables****.*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

1. Es así como todos los actos de autoridad que realicen los Sujetos Obligados deben estar documentados y, bajo el más alto estándar de transparencia, deberán poner toda la información que se encuentre en su posesión, de manera permanente y actualizada, a disposición de los particulares que la soliciten.
2. Por otro lado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, actualizada, completa, congruente, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberá estar definido y ser además legítima y estrictamente necesaria en una sociedad democrática, por lo que atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona[[10]](#footnote-11).
3. En ese sentido, por un lado, se tiene la obligación de documentar todos los actos que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias; mientras que por otro, se ven impuestos por la obligación de hacer pública toda aquella información que se encuentre en su posesión en estricto apego a los principios de eficacia[[11]](#footnote-12) y máxima publicidad; sobre éste último se debe poner mayor énfasis, puesto que establece que **toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será** pública, completa, **oportuna** y **accesible**, **lo que permite que la ciudadanía tenga un amplio acceso sobre lo que es el actuar de las autoridades**.
4. Robustece lo anterior la Tesis aislada identificada con la clave I.4º.A.40 A del Cuarto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el libro XVIII, Marzo 2013, Página 1899:

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.*** *“Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.”*

1. Tal y como se ha señalado, **el derecho de acceso a la información se basa en permitir que la ciudadanía conozca de primera mano toda aquella información que se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados**, ya sea porque la genera, posee o administra; **toda vez que**, a través de dicha acción, **permite que las personas ejerzan un medio de control sobre las acciones que se están ejerciendo y evaluar su desempeño**.

**III. Del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México.**

1. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, y el Gobierno del Estado de México firmaron, el quince (15) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, un Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), a fin de contribuir a impulsar y consolidar los programas de educación media superior tecnológica en la entidad[[12]](#footnote-13).

1. Derivado del Convenio, el Gobierno del Estado del Estado de México efectuó las acciones jurídicas necesarias para la creación del mencionado Colegio, por lo que la “LII” Legislatura del Estado emitió, mediante el Decreto No. 48, la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), con personalidad jurídica y patrimonio propios, publicada en el periódico oficial “*Gaceta del Gobierno*“, el diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro[[13]](#footnote-14).
2. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México tiene por objeto impartir educación media superior terminal, terminal por convenio y bivalente de carácter tecnológico; promover un mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y contribuir a su utilización racional; reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares y extracurriculares debidamente planeadas y ejecutadas; promover y difundir la actitud crítica derivada de la verdad científica, la previsión y búsqueda del futuro con base en el objeto de nuestra realidad y valores nacionales, promover la cultura estatal, nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico; y, realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social del ser humano[[14]](#footnote-15).
3. De acuerdo con su Ley de Creación, las autoridades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México serán:
   1. La Junta Directiva;
   2. **El Director General**;
   3. Los Directores de área; y
   4. Los Directores de plantel.
4. Siendo de especial interés, para el presente asunto, el Director General, quien de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento Interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, tendrá las siguientes atribuciones:

*“****Artículo 11.-*** *Corresponde al titular de la Dirección General, además de las señaladas en la Ley, las atribuciones siguientes:*

***I.*** *Verificar y supervisar que las actividades de las unidades administrativas del Colegio se realicen de manera coordinada;*

*(…)*

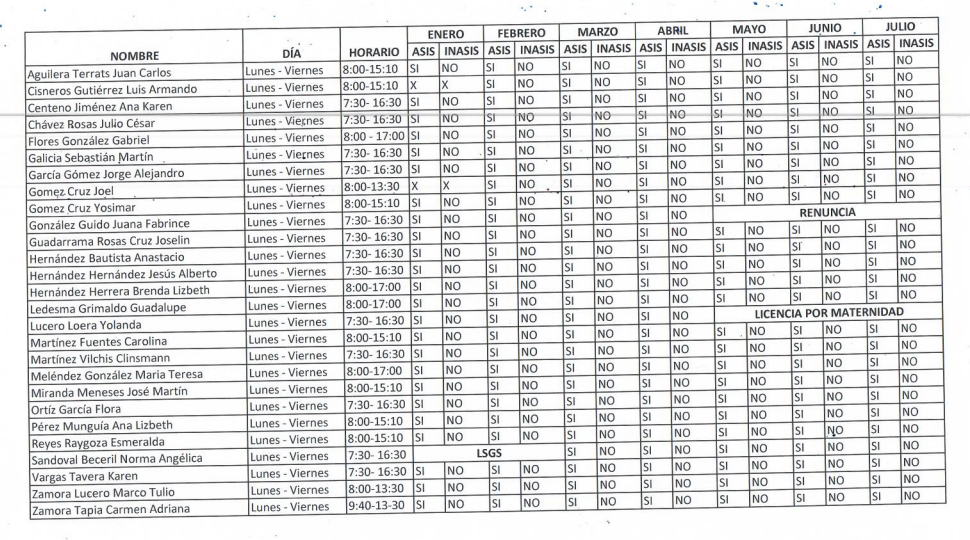
***VIII.*** *Autorizar permisos o licencias al personal de la Dirección General;*

*(…)*

***XV.*** *Nombrar y remover a los titulares de las unidades administrativas, cuyo nombramiento no deba ser aprobado por la Junta Directiva;*

*(…)”*

1. Ahora bien, para el estudio, planeación, administración y despacho de los asuntos de su competencia, la persona titular de la Dirección General se auxiliará de las unidades administrativas básicas siguientes[[15]](#footnote-16):
   1. Dirección Académica;
   2. Dirección de Vinculación con los Sectores Productivo y de Servicios;
   3. Dirección de Planeación y Evaluación Institucional;
   4. Dirección de Administración y Finanzas;
   5. Unidad Jurídica y de Igualdad de Género; y
   6. **Planteles Educativos**.
2. Para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, el Colegio contará con planteles educativos que señale su estructura de organización autorizada, los cuales ejecutarán los planes y programas de estudio de su competencia[[16]](#footnote-17).
3. Al frente de cada plantel educativo habrá un titular de la Dirección del Plantel, quien se auxiliará de las áreas administrativas y académicas que le sean autorizadas[[17]](#footnote-18). De acuerdo con lo establecido por el numeral 34 del Reglamento Interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, los Directores de Plantel tendrán, entre otras, las siguientes atribuciones:
   1. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las actividades de la unidad administrativa asignada; y
   2. **Vigilar el adecuado funcionamiento académico y administrativo** de la unidad administrativa a su cargo.
4. Así las cosas, este Organismo Garante identifica al Director del Plantel Nicolás Romero III como el titular del área administrativa o dependencia competente para atender la solicitud de información **00050/CECyTEM/IP/2023**, al ser justamente el plantel respecto del cual se requirió información de su personal y, como hemos analizado en líneas previas, es justamente el Director del Plantel quien se halla directamente encargado de vigilar el adecuado funcionamiento administrativo de la unidad administrativa a su cargo.
5. Ahora bien, como fuera señalado en el apartado de *Antecedentes* de la presente resolución, el **SUJETO OBLIGADO** hizo entrega de una relación con el nombre de todos los servidores públicos (docentes y administrativos) adscritos al Plantel Nicolás Romero III, mismo que se comparte a continuación:



1. De la imagen anterior, podemos identificar el nombre de todos y cada uno de los servidores públicos adscritos al Plantel Nicolás Romero III, así como sus días y horarios laborales, junto con un reporte de asistencias e inasistencias, por mes, de enero a julio de dos mil veintitrés.
2. Al respecto, resulta elemental señalar que este Órgano Garante no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información que los Sujetos Obligados ponen a disposición de los Solicitantes; situación que se aleja de las atribuciones de este Instituto, máxime que al momento que ponen a disposición ésta, la misma tiene el carácter de **oficial** y se presume **veraz**, tan es así que la misma queda registrada en el SAIMEX.
3. Lo anterior encuentra sustento mediante el Criterio 31-10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, mismo que dice:

***EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS NO CUENTA CON FACULTADES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS.*** *“El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.”*

1. Por su parte, y como fuera establecido en el *Planteamiento de la Litis*, el **RECURRENTE** no impugnó la validez de la información proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO**, sino que se le había entregado un documento en el que se resumía y reportaba lo requerido a través de la solicitud **00050/CECyTEM/IP/2023**.
2. Al respecto, conviene recordar en este punto que la esencia del derecho de acceso a la información consiste justamente en la prerrogativa de la ciudadanía de acceder a todo documento generado, poseído o administrado por las entidades públicas en ejercicio de sus funciones.
3. Lo anterior es reconocido a través del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, donde se establece que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y **en el estado en que ésta se encuentre**; lo anterior en virtud de que **la obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante**; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.
4. Correlativo a lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de su Criterio de Interpretación 003/2017, reconoce que no existe obligación para generar documentos hechos *a modo* para atender solicitudes de información:

***NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.*** *“Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.”*

1. Del corolario anterior, se entiende que, a fin de atender las solicitudes de información, los Sujetos Obligados deberán buscar y proporcionar la información con la que cuenten, generada de forma orgánica en el ejercicio de sus funciones, sin necesidad de crear documentos novedosos en los que procese o presente información de acuerdo con las necesidades específicas que señalen los Solicitantes.
2. Luego entonces, si bien es cierto que la Ley no constriñe a generar este tipo de documentos *ad hoc*, también lo es que los Sujetos Obligados pueden concebirlos en un ejercicio de **máxima publicidad** y, al consistir en información proporcionada por un ente público, la misma tiene el mismo valor **verídico** que el compendio de documentos de los que se sintetizó la información.
3. Por lo tanto, por cuanto hace a los agravios formulados en el recurso de revisión **04813/INFOEM/IP/RR/2023**, a través de los cuales, el **RECURRENTE** se dolió porque el **SUJETO OBLIGADO** entregó la información resumida, deben declararse **inoperantes**, puesto que el fin de la impugnación de una respuesta en materia de acceso a la información busca que se haga entrega de información que, por alguna de las razones consideradas en el artículo 179 de la Ley de la materia no haya sido entregada; mientras que en el presente asunto, el particular reconoce tácitamente que se le hizo entrega de lo solicitado, pero en un formado sintetizado.
4. Razón de lo anterior, y toda vez que el **SUJETO OBLIGADO** hizo entrega de la información solicitada, este Organismo Garante concluye conforme a derecho el **confirmar** la respuesta otorgada a la solicitud de información **00050/CECyTEM/IP/2023**.

**QUINTO. Decisión.**

1. Dentro del estudio del asunto, una vez establecida la competencia del **SUEJTO OBLIGADO** para poseer, generar y administrar la información relacionada con los nombres del personal adscrito al Plantel Nicolás Romero III, así como sus horarios de labores y reportes de asistencias e inasistencias de enero a julio de dos mil veintitrés, y luego de analizar el contenido de los documentos entregados en respuesta a la solicitud de información **00050/CECyTEM/IP/2023**, se concluyó que el **SUJETO OBLIGADO** había atendido el derecho de acceso a la información ejercido por el particular, ya que la relación del personal proveída por el Director del Plantel, contenía todos los requerimientos formulados por el particular en relación con el personal docente y administrativo.
2. Por lo tanto, en consecuencia y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan infundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **04813/INFOEM/IP/RR/2023**; por ello, y con fundamento en la fracción II del numeral 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **CONFIRMA** la respuesta a la solicitud de información número **00050/CECyTEM/IP/2023**.
3. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# **R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan infundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **04813/INFOEM/IP/RR/2023,** en términos del **considerando** **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **CONFIRMA** la respuesta emitida por el **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México**, a la solicitud **00050/CECyTEM/IP/2023.**

**TERCERO.** **REMÍTASE,** vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO.**

**CUARTO.** Notifíquese al **RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) y correo electrónico.

**QUINTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las Leyes aplicables.

ASÍ LO APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS (06) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. “**Artículo 181.-** (…)

   El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la presente ley, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de quince días hábiles.

   (…)” [↑](#footnote-ref-2)
2. “*El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia.*” [↑](#footnote-ref-3)
3. Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351. [↑](#footnote-ref-4)
4. Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350. [↑](#footnote-ref-5)
5. Artículo 50, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-6)
6. Artículo 51, Ídem. [↑](#footnote-ref-7)
7. Artículo 58, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-8)
8. Artículo 59, Ídem. [↑](#footnote-ref-9)
9. Artículo 3, fracción XI, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-10)
10. Artículo 11, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

    “Artículo 9.(…)

    II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

    (…)” [↑](#footnote-ref-12)
12. Historia del CECyTEM, disponible en: https://cecytem.edomex.gob.mx/historia#:~:text=%E2%80%9CLII%E2%80%9D%20Legislatura%20del%20Estado%20emiti%C3%B3,personalidad%20jur%C3%ADdica%20y%20patrimonio%20propios. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibídem. [↑](#footnote-ref-14)
14. Historia del CECyTEM, disponible en: https://cecytem.edomex.gob.mx/historia#:~:text=%E2%80%9CLII%E2%80%9D%20Legislatura%20del%20Estado%20emiti%C3%B3,personalidad%20jur%C3%ADdica%20y%20patrimonio%20propios. [↑](#footnote-ref-15)
15. Artículo 12, Reglamento Interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México [↑](#footnote-ref-16)
16. Artículo 22, Ídem. [↑](#footnote-ref-17)
17. Artículo 23, Ídem. [↑](#footnote-ref-18)